

UN ESTADO CAPTURADO:

la sombra del fujimorismo



CONGRESO

Oswaldo A. Guevara



Analitica
360°

Un Estado Capturado: La Sombra del Fujimorismo

Oswaldo A. Guevara

2025



Editorial
Analítica 360°

Contenido

0.1	Introducción	1
0.2	Breve historia del Fujimorismo	2
0.3	Mención “honorífica” a Vladimiro Montesinos	4
0.4	El Fujimorismo después de Fujimori: sobrevivir, mutar y volver al juego . . .	6
0.5	La toma de los poderes del Estado: infiltración, control y captura institucional .	10
0.6	La señora en cuestión: el poder de Keiko sin una sola banda presidencial . . .	12
0.7	Consecuencias para la democracia peruana: entre la erosión y la resignación .	14
0.8	Conclusión: un país rehén del pasado.....	16

0.1 Introducción

En el Perú, hablar del fujimorismo no es solo hablar de un partido político o de un apellido. Es hablar de un modelo de poder que ha sobrevivido a escándalos, condenas judiciales, derrotas electorales y acusaciones de corrupción sistemática. Es hablar de una lógica de control que ha permeado las instituciones del Estado, creando un sistema en el que muchas decisiones no responden al interés público, sino a los intereses de un grupo político con capacidad de chantaje, obstrucción y manipulación. Desde el autogolpe de 1992, cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso con apoyo de las Fuerzas Armadas y reconfiguró el sistema político a su medida, el país entró en una nueva etapa. Lo que se presentó como una cruzada contra el terrorismo y la corrupción terminó consolidando una dictadura encubierta, con un aparato de propaganda, cooptación institucional y represión que sentó las bases del poder fujimorista. A más de tres décadas del inicio de ese régimen, las huellas de aquel proyecto autoritario siguen vigentes. Hoy, aunque Alberto Fujimori, ya fallecido, fue condenado en su momento por crímenes de lesa humanidad, su legado sigue operando a través de estructuras políticas, redes clientelares y figuras como su hija Keiko Fujimori, quien, sin haber ganado una elección presidencial, ejerce una influencia determinante sobre el rumbo del país. Su partido, Fuerza Popular, ha sido protagonista de múltiples episodios de bloqueo político, ha colonizado instituciones clave y ha instaurado una lógica de “gobernabilidad negociada” que paraliza al Ejecutivo si no hay beneficios para su bancada. Pero el fujimorismo no opera solo con votos en el Congreso. Se ha infiltrado en el Ministerio Público, ha intentado controlar la Junta Nacional de Justicia, influye en los nombramientos del Tribunal Constitucional y mantiene nexos con sectores del empresariado, la ultraderecha internacional y medios de comunicación. Y en este ajedrez político, muchas piezas siguen moviéndose bajo la lógica montesinista: manipulación, chantaje, control del relato y operaciones encubiertas. Este artículo propone diseccionar ese fenómeno: cómo el fujimorismo ha capturado al Estado, qué mecanismos usa, quiénes lo sostienen, y cuáles son las consecuencias para la democracia peruana. En especial, se pone el foco sobre el papel central que juega Keiko Fujimori, cuya influencia informal trasciende los márgenes de lo legal e institucional. Su nombre se menciona en pasillos del Congreso, en conversaciones de fiscales, en debates judiciales y en decisiones que, aunque formalmente independientes, terminan alineadas a sus intereses. Más allá de las elecciones, más allá de la narrativa de la “lucha contra el comunismo” que han esgrimido para justificar sus acciones, el fujimorismo representa hoy una forma de poder enquistado, difícil de erradicar, pero urgente de exponer. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Y cómo se puede revertir este proceso sin que se repita la historia?

0.2 Breve historia del Fujimorismo

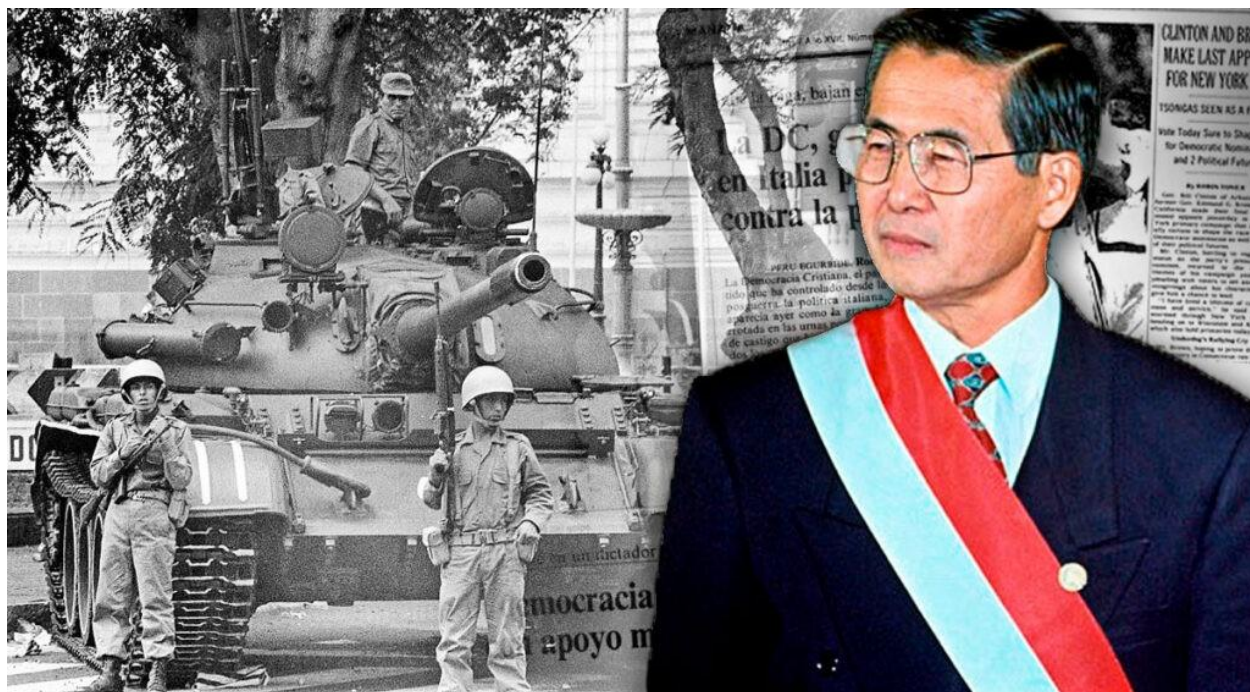


Figure 1: Alberto Fujimori

El fujimorismo nació de una anomalía política y se convirtió en una maquinaria de poder. En 1990, Alberto Fujimori, un ingeniero agrónomo prácticamente desconocido, derrota sorpresivamente a Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta presidencial. Se presenta como un outsider, sin partido político tradicional, con un discurso populista y pragmático que seduce a una población harta del establishment (grupo de personas que ejerce el poder en un país, en una organización o en un ámbito determinado) y aterrada por la hiperinflación y el terrorismo.

Autoritarismo con rostro democrático

Fujimori mantuvo una fachada democrática: elecciones, Congreso, Constitución... pero todo bajo su dominio. En 1993 impuso una nueva Carta Magna a medida, diseñada para perpetuarse, permitiendo la reelección presidencial. En

Una vez en el poder, Fujimori toma un camino radical. En abril de 1992, da un autogolpe de Estado: disuelve el Congreso, interviene el Poder Judicial y concentra el poder en el Ejecutivo. Lo hace con el apoyo de las Fuerzas Armadas y el asesor estratégico más oscuro de la historia política peruana: Vladimiro Montesinos. El discurso oficial habla de "refundar el Estado" y "combatir al terrorismo y la corrupción". La realidad: se instaura un régimen autoritario que elimina contrapesos, silencia a la prensa, persigue a opositores y convierte las instituciones en extensiones del poder presidencial.

1995 fue reelegido con amplio margen, gracias al control de los medios y el aparato estatal. Para el 2000, ya sin máscaras, forzó un tercer mandato violando su propia Constitución, respaldado por un Tribunal Constitucional cap-

turado — cuando el Estado no sólo regula, sino que es el propio capturado —.

Durante esta década, el régimen construyó una red de lealtades basada en favores, miedo y corrupción. Se compraban congresistas, se chantajeaban medios, se fabricaban procesos judiciales. El “estado de derecho” existía sólo en apariencia. Al mismo tiempo, se ejecutaron re-

formas económicas radicales (apertura de mercado, privatizaciones) y se logró la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, lo que aumentó el respaldo popular.

Pero el precio fue altísimo: esterilizaciones forzadas a miles de mujeres, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, censura, control absoluto del aparato estatal.

El derrumbe y el inicio del mito

El 2000 fue el principio del fin. Un “vladi-video” —una grabación de Montesinos entregando sobornos a un congresista— desató el escándalo. Se destapó una megacorrupción sistémica. Montesinos huyó del país. Fujimori, en una jugada inaudita, viajó a Japón y renunció por fax a la presidencia.

El Congreso, dominado ya por una nueva mayoría opositora, rechazó su renuncia y lo destituyó

por incapacidad moral. En 2005, fue arrestado en Chile y extraditado al Perú, donde fue condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Sin embargo, el fujimorismo no murió con la caída de su líder. Todo lo contrario: se reorganizó y capitalizó el apoyo popular residual y reapareció con fuerza en los años siguientes, bajo una nueva figura.

0.3 Mención “honorífica” a Vladimiro Montesinos



Figure 2: Vladimiro Montesinos

Antes de continuar con la evolución del fujimorismo post-Fujimori, es imposible no detenerse en la figura clave detrás del telón: Vladimiro Montesinos Torres, el operador en las sombras, el titiritero, El Danzo de la aldea escondida en la corrupción, el cerebro detrás de uno de los sistemas de control más sofisticados y oscuros que haya conocido América Latina.

Montesinos no fue un simple asesor. Fue el arquitecto de una red de inteligencia, corrupción y chantaje que infiltró todos los niveles del poder estatal. Ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, abogado de narcotraficantes, y personaje con estrechos vínculos con la CIA, se convirtió en el verdadero estratega del régimen de Fujimori desde 1990 hasta su caída en el 2000.

El poder desde la oscuridad

Desde la Base Naval del Callao, convertida en su oficina secreta, Montesinos diseñó un sistema de vigilancia masiva, cooptación de instituciones, compra de lealtades políticas y manipulación mediática. Su instrumento más temido: los “vladivideos”, grabaciones clandestinas donde se ve a políticos, empresarios y dueños de medios recibiendo fajos de dinero a cambio de

su apoyo al régimen.

Montesinos no sólo repartía maletines. Coordinaba campañas de difamación, ordenaba seguimientos ilegales, intervenía teléfonos, y tenía el control del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), desde donde manejaba al Congreso, al Poder Judicial, al Ministerio Público,

y a buena parte de la prensa.

Su nivel de poder era tal que muchos afirman

que Fujimori gobernaba solo en lo formal; quien realmente tejía el entramado del régimen era Montesinos. Y lo hacía con precisión quirúrgica.

De operador a símbolo de la corrupción sistémica

En el año 2000, con la difusión del primer vladivideo, el sistema montesinista se desplomó. Huyó en un yate a Panamá, luego a Venezuela, y finalmente fue capturado en 2001. Desde entonces cumple condena por múltiples delitos: tráfico de armas, corrupción, desapariciones forzadas, entre otros.

Pero más allá de su encarcelamiento, su legado

sigue vigente. El fujimorismo moderno ha reciclado muchas de sus tácticas: el uso del Congreso para perseguir opositores, el control mediático, el manejo de la justicia, y las campañas de desprestigio sistemáticas. La lógica montesinista —el poder oculto, la manipulación y la corrupción como herramienta de gobierno— aún vive en la práctica política fujimorista.

0.4 El Fujimorismo después de Fujimori: sobrevivir, mutar y volver al juego

La caída de Alberto Fujimori en el año 2000 parecía el final definitivo de un régimen. El expresidente fue destituido, Montesinos encarcelado, y el país entró en una etapa de “transición democrática” liderada por Valentín Pani-

agua. Pero lo que parecía una muerte política fue solo una mutación. El fujimorismo no desapareció: se reconfiguró, cambió de rostro y volvió al ruedo.

Del padre a la hija: el relevo dinástico

En 2006, Keiko Fujimori, primogénita del expresidente, ingresó oficialmente a la política. Con apenas 31 años, fue la congresista más votada del país. Desde entonces, su figura ha estado en el centro del proyecto fujimorista. Heredó no solo el capital político de su padre, sino también el aparato partidario, los recursos, y el respaldo de una base social consolidada en sectores populares, especialmente en la sierra y costa norte del país.

En 2011, Keiko se lanza a la presidencia y llega a segunda vuelta contra Ollanta Humala. Pierde por un margen estrecho. En 2016 repite el intento, esta vez contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y nuevamente pierde por décimas. En 2021 lo intenta por tercera vez, esta vez frente a Pedro Castillo, y otra vez es derrotada. A pesar de eso, el fujimorismo nunca ha dejado de tener poder real.

El Congreso como bastión del poder

La verdadera fortaleza del fujimorismo ha estado en el Congreso. En 2016, Fuerza Popular consiguió una mayoría aplastante: 73 de 130 congresistas. Desde ahí, Keiko gobernó sin gobernar. No necesitó la presidencia para imponer su agenda: obstruyó reformas, censuró ministros, presionó al Ejecutivo y bloqueó cualquier intento de cambio que no le favoreciera. Su estrategia fue clara: destruir al adversario político antes que permitir que este gobierne.

Este poder se utilizó no solo para blindar intereses propios, sino también para negociar cuotas de poder en el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y los organismos electorales. Se instauró una lógica de chantaje institucional: o se cede a las exigencias de Fuerza Popular, o no hay gobernabilidad. Esta fórmula, perfeccionada tras años de operar como oposición con mayoría parlamen-

taria, convirtió al Congreso en una herramienta de control y venganza política.

Incluso con bancadas reducidas en los congresos siguientes, el fujimorismo ha mantenido alianzas estratégicas con sectores ultraconservadores, grupos empresariales, facciones evangélicas y bloques de derecha radical. En algunos casos, ha funcionado como el núcleo duro de una coalición informal autoritaria, que defiende privilegios históricos, impide investigaciones por corrupción, y ataca sistemáticamente a la prensa, la academia crítica y el sistema de justicia cuando no le son funcionales.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ha sido uno de los más claros al señalar la mano fujimorista detrás de la crisis política que lo llevó a renunciar en 2018. En una entrevista, no titubeó al decir: “Keiko fregó al Perú”. Según su testimonio, desde el primer día de su gob-



Figure 3: Keiko Fujimori

iermo recibió presiones y amenazas del bloque fujimorista, el cual no toleró haber perdido la presidencia por décimas de punto. Kuczynski aseguró que el costo de no haber pactado con Keiko fue el colapso de su gobierno, que terminó acosado por pedidos de vacancia y escándalos alimentados desde el Legislativo.

Más adelante, en el gobierno de Martín Vizcarra, la historia se repitió. A pesar de haber sido inicialmente vicepresidente de PPK, Vizcarra también fue blanco del asedio fujimorista. Su intento de impulsar una reforma política y judicial que tocaba intereses concretos del Congreso fue enfrentado con una ofensiva legislativa que incluyó la censura de ministros, el sabotaje de las reformas y, finalmente, un proceso de vacancia. En octubre de 2019, Vizcarra disolvió el Congreso con base en el artículo 134 de la Constitución, lo que desató una nueva crisis institucional. La narrativa fujimorista lo presentó como un golpe de Estado, cuando en realidad fue

una reacción al secuestro del sistema por parte del Legislativo.

El politólogo Alberto Vergara, uno de los más agudos analistas del fenómeno, lo resume de forma directa: “El fujimorismo ha sido el gran partido antisistema desde adentro del sistema”. Para Vergara, el Congreso dominado por Fuerza Popular entre 2016 y 2020 no sólo paralizó al Ejecutivo, sino que intentó reconfigurar el Estado a su imagen y semejanza. No había una propuesta programática clara, sino una agenda basada en el bloqueo, la revancha y el cálculo del poder.

El también politólogo Carlos Meléndez ha explicado que el fujimorismo funciona como un “partido patronal de guerra”, es decir, una estructura que sobrevive no por su propuesta política, sino por su capacidad de movilizar recursos, castigar adversarios y alinear fuerzas en función de intereses particulares.

Las sombras de la justicia



Figure 4: Keiko Fujimori en su juicio por lavado de activos

Mientras tanto, Keiko Fujimori ha enfrentado investigaciones por lavado de activos, obstrucción a la justicia y organización criminal, en el marco del caso Odebrecht. Ha estado en prisión preventiva en dos ocasiones (2018 y 2020). A pesar de ello, ni sus problemas judiciales ni sus derrotas electorales han debilitado del todo su influencia. Paradójicamente, cada proceso judicial en su contra ha sido usado por su entorno como prueba de una supuesta persecución política. Esta narrativa le ha permitido victimizarse y movilizar a su base con discursos de polarización ideológica (“comunismo vs. libertad”) que calan en sectores conservadores. El politólogo Daniel Encinas ha señalado que esta táctica evolucionó y que los políticos conservadores la utilizaron para atacar a los opositores

a las políticas neoliberales de Fujimori y manipular el legado de violencia política. Algunos políticos enviaron cartas notariales a personas críticas con el fujimorismo. Mientras persistió dicha táctica, los medios de comunicación peruanos la emplearon junto con las noticias falsas para apoyar a Keiko Fujimori. Justo antes de la segunda vuelta de las elecciones de 2021, se difundió propaganda a favor de Fujimori por todo Perú a través de anuncios pagados, algunos de los cuales decían: «Piensa en tu futuro. No al comunismo». En resumen, Keiko Fujimori ha enfrentado múltiples procesos judiciales relacionados con lavado de activos y organización criminal, pero ha utilizado estos procesos para fortalecer su narrativa de persecución política y mantener su influencia en la política peruana.

0.5 La toma de los poderes del Estado: infiltración, control y captura institucional

Una de las estrategias más persistentes del fujimorismo ha sido la captura progresiva de las instituciones del Estado. No se trata solo de tener presencia o influencia, sino de colonizar los espacios de poder, manipular procesos de designación, y garantizar lealtades funcionales. Lo que empezó como un ejercicio de fuerza en el Congreso en 2016, rápidamente se transformó en una ofensiva más amplia para ocupar el sistema de justicia, los órganos electorales, el Tribunal Constitucional y hasta la Defensoría del Pueblo.

El Ministerio Público: fiscales a medida

Durante años, el fujimorismo buscó interferir en la labor del Ministerio Público, especialmente cuando las investigaciones por corrupción tocaban a figuras vinculadas a Keiko Fujimori y su entorno. Un momento emblemático fue en 2018, cuando se desató el escándalo de los “CNM Audios”, que revelaron redes de tráfico de influencias y pactos bajo la mesa entre magistrados, políticos y empresarios.

El caso puso al descubierto cómo se operaba para colocar fiscales y jueces a conveniencia, mediante acuerdos oscuros en el ya desacreditado Consejo Nacional de la Magistratura. El fujimorismo, lejos de tomar distancia, fue acusado de proteger a personajes clave de ese entramado, y de bloquear reformas que buscaban limpiar la casa.

El Tribunal Constitucional: blindaje político-judicial

En 2020, en medio de una de las tantas crisis políticas, el Congreso —dominada por fuerzas aliadas al fujimorismo— intentó imponer un nuevo Tribunal Constitucional (TC) sin un proceso transparente ni meritocrático. La jugada fue denunciada por diversos sectores como un intento de garantizarse impunidad futura y control sobre decisiones clave, especialmente en casos relacionados con la corrupción y derechos

fundamentales.

El intento generó tal escándalo que fue suspendido momentáneamente tras la disolución del Congreso por parte de Martín Vizcarra. Sin embargo, el interés por copar el TC no ha cesado: sigue siendo un objetivo estratégico para asegurar fallos favorables y detener cualquier norma que ponga en riesgo los privilegios de los grupos que orbitan alrededor del fujimorismo.

La Junta Nacional de Justicia: enemigo declarado

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), encargada de nombrar y sancionar jueces y fiscales, también se convirtió en blanco. En los últimos años, congresistas fujimoristas y sus aliados han intentado destituir a sus miembros, bajo pretextos

administrativos o cuestionamientos menores. El trasfondo es claro: desactivar a un organismo que ha sido uno de los pocos en ejercer cierto contrapeso frente al poder político.

Organismos electorales: el último bastión

Durante la campaña electoral de 2021, y tras la derrota de Keiko frente a Pedro Castillo, el fujimorismo emprendió una guerra abierta contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE, alegando sin pruebas un “fraude electoral” en su contra. Esta narrativa fue impulsada por sectores mediáticos afines, abogados de derecha radical, y grupos de ultraderecha internacional.

Aunque no lograron revertir los resultados, el objetivo fue erosionar la credibilidad del sistema electoral, abrir la puerta a futuras intervenciones, y posicionar la idea de que cualquier elección que no gane el fujimorismo es ilegítima. Desde entonces, han promovido reformas legales para recortar funciones de los organismos electorales,

cambiar sus procesos de selección, e incluso disolverlos.

La Defensoría del Pueblo: la captura más silenciosa En 2022, el Congreso –con mayoría fujimorista y aliada– eligió como nuevo defensor del pueblo a Josué Gutiérrez, un abogado sin experiencia en derechos humanos, excongresista del partido de Ollanta Humala y abogado del prófugo Vladimir Cerrón. Su elección fue criticada por organismos internacionales como la CIDH, que alertaron sobre la politización de una institución clave para la defensa de los ciudadanos. El nombramiento, ampliamente negociado entre Fuerza Popular y otras bancadas, fue un claro ejemplo de cómo se reparten el Estado como botín.

0.6 La señora en cuestión: el poder de Keiko sin una sola banda presidencial

En el centro de esta trama de influencia y captura institucional está Keiko Fujimori, la heredera política del régimen de su padre y la figura más poderosa del país sin haber sido presidenta. No ha necesitado la banda presidencial para ejercer un poder real y duradero: ha gobernado desde las sombras, desde la bancada, desde las alianzas y desde el miedo.

Desde 2011, año de su primera postulación presidencial, Keiko Fujimori ha sido la figura ineludible de la política peruana. Perdió tres elecciones consecutivas, pero ninguna de esas derrotas ha supuesto una retirada del poder. Por el contrario, tras cada fracaso, ha logrado reorganizar su bancada, mantener el control del Congreso o formar parte de coaliciones conservado-

ras que marcan la agenda nacional. Si el fujimorismo tiene hoy el poder que tiene, es porque su liderazgo lo ha sostenido con una mezcla de cálculo, chantaje político y una estructura partidaria aceitada.

A pesar de estar procesada por lavado de activos, obstrucción a la justicia y presunto liderazgo de una organización criminal —acusaciones que podrían costarle 30 años de prisión—, Keiko ha conseguido mantener su relevancia con una estrategia doble: victimización y polarización. Su narrativa se ha simplificado en una fórmula efectiva: “yo o el comunismo”. Esta estrategia le ha permitido captar sectores de la clase media alta, evangélicos, conservadores y empresarios que ven en ella un “mal necesario”.

La operadora silenciosa

En los pasillos del Congreso y en las oficinas de las bancadas aliadas, se sabe que nada importante se aprueba sin el visto bueno de Keiko. Aun cuando no tenga curul, su palabra pesa más que la de cualquier presidente. Legisladores le deben favores, fiscales la temen, y magistrados saben que meterse con ella puede significar perder sus cargos.

Diversos periodistas de investigación y anal-

istas políticos han sostenido que Keiko opera como una jefa de coalición informal, que negocia apoyos, reparte cuotas de poder y moviliza operadores políticos. El periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, ha sido uno de los más insistentes en denunciar las presiones del entorno fujimorista contra jueces, fiscales y periodistas. Para Gorriti, el fujimorismo no solo sobrevive, sino que se “fortalece en la podredumbre del sistema”.

“Gobierna sin gobernar”

El politólogo Alberto Vergara ha sintetizado con precisión el fenómeno: “Keiko ha tenido más poder sin ser presidenta que muchos que sí lo fueron”. Desde el Congreso de 2016 hasta hoy, ha demostrado que el poder no siempre está en el

Ejecutivo. Su verdadero terreno ha sido el Legislativo, los medios de comunicación aliados, las alianzas con la derecha radical, y la amenaza constante de la vacancia o la obstrucción como arma de presión.

La paradoja del poder sin responsabilidad

El gran éxito de Keiko Fujimori ha sido acumular poder sin asumir el costo de gobernar. Puede bloquear, desestabilizar, chantajear y condicionar, pero no firma decretos ni asume la gestión pública. En otras palabras, ejerce poder sin responsabilidad, algo que ha convertido la política peruana en un campo minado. Gobiernos débiles, presidentes efímeros y un Estado en crisis han sido el saldo de una figura que actúa desde la sombra pero marca el rumbo.

0.7 Consecuencias para la democracia peruana: entre la erosión y la resignación

La influencia del fujimorismo en los poderes del Estado no es solo un problema político. Es una crisis sistémica que ha minado la confianza en las instituciones, debilitado el Estado de derecho y llevado al Perú a una especie de normalización del autoritarismo disfrazado de legalidad. Las consecuencias de este modelo no se limitan al presente: están hipotecando el futuro democrático del país.

1. Deslegitimación de la política y las instituciones

La ciudadanía ha sido testigo, una y otra vez, de cómo el Congreso legisla no en función del bien común, sino de **intereses particulares, pactos oscuros y retaliaciones políticas**. Esto ha provocado un profundo **desencanto con la democracia**, reflejado en las encuestas: el Perú es uno de los países de América Latina con **mayor desconfianza en el Congreso, los partidos y el sistema judicial**. Cuando los órganos encargados de proteger derechos o impartir justicia son capturados o instrumentalizados, el resultado es claro: **la gente deja de creer**.

2. Cultura de impunidad institucionalizada

El blindaje a personajes cuestionados, el uso político del Congreso para obstruir investigaciones, y la manipulación del sistema judicial han creado una **cultura de impunidad** que favorece a los poderosos y deja indefensos a los ciudadanos. Los casos de corrupción no avanzan si tocan a aliados del fujimorismo, mientras que opositores pueden ser perseguidos o difamados con total impunidad. Este desequilibrio refuerza la percepción de que **la justicia no es igual para todos**, sino una herramienta más de la lucha por el poder.

3. Normalización del chantaje político

El fujimorismo ha instalado una lógica perversa: **quien no negocia, no gobierna**. Esta “política del chantaje” ha dejado al Ejecutivo constantemente maniatado. Presidentes como Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo enfrentaron intentos de vacancia, censuras arbitrarias a ministros y un sabotaje sistemático a cualquier intento de reforma. En lugar de una democracia de contrapesos, el Perú vive una **democracia de extorsiones institucionalizadas**.

4. Polarización permanente y desgaste social

La narrativa fujimorista de “comunismo vs. libertad” ha sido **una fábrica de polarización**. En vez de promover el debate racional, se ha alimentado el miedo, el odio y la confrontación. Esta estrategia ha sido especialmente efectiva durante las campañas electorales, pero también ha contaminado la vida pública cotidiana, provocando un **ambiente tóxico** en redes sociales, medios y hasta en las familias. La polarización ha impedido construir consensos y **profundiza la fragmentación social**.

5. Debilitamiento del Estado y retroceso democrático

Cuando el Congreso se vuelve una trinchera de intereses particulares, cuando el Tribunal Constitucional responde a cuotas de poder, cuando los organismos electorales están bajo ataque constante, y cuando la prensa libre es difamada o judicializada, **no hay democracia que aguante**. El resultado es un Estado debilitado, sin capacidad para resolver los problemas estructurales del país. Pobreza, desigualdad, violencia y corrupción se agravan cuando las instituciones son meros instrumentos de una élite política.

6. La democracia como fachada

En este contexto, el Perú vive bajo una especie de **“fachada democrática”**. Hay elecciones, sí; hay división de poderes en el papel, también. Pero **en la práctica**, los principios fundamentales de la democracia han sido erosionados: no hay respeto a la institucionalidad, no hay independencia de poderes, y no hay garantías reales de justicia ni representación. El modelo fujimorista ha instaurado una lógica donde **el poder se ejerce sin control, sin ética y sin consecuencias**.

0.8 Conclusión: un país rehén del pasado

El fujimorismo no es solo un capítulo del pasado peruano; es una **herida abierta que sigue sangrando en el presente**. Más que una corriente política, se ha convertido en una **forma de operar el poder**: vertical, autoritaria, oportunista, y profundamente desconfiada de la democracia como proyecto colectivo. Bajo su influencia, el Perú ha visto **cómo se vacían las instituciones, se distorsionan los principios republicanos y se negocia la legalidad al mejor postor**.

Durante décadas, el fujimorismo ha demostrado una **habilidad extraordinaria para mutar, adaptarse y sobrevivir**. Ha perdido elecciones, ha enfrentado juicios, ha visto caer a sus líderes y aún así **sigue dictando los ritmos de la política nacional**. Y lo hace no desde el Gobierno, sino desde los bordes, desde el Congreso, desde las alianzas, desde las sombras.

Este fenómeno representa **un fracaso colectivo**: de las élites que lo pactaron, de los medios que lo blanquearon, de los votantes que lo sostienen por miedo o resignación, y también de una izquierda y un centro que no han logrado construir alternativas duraderas. Mientras tanto, el país sigue atrapado en una lógica donde el poder no se ejerce para transformar, sino para **obstruir, blindar y castigar**.

La gran paradoja es que **el fujimorismo ha destruido más de lo que ha construido, pero aún así muchos lo siguen viendo como una opción de “orden” frente al caos**. Ese orden, sin embargo, es autoritario, excluyente y profundamente corrosivo. No es un orden democrático: es un régimen de control encubierto bajo las formas de la legalidad.

Pero la historia no está escrita en piedra. Aunque hoy parezca que la democracia ha sido secuestrada, **las resistencias existen**: desde la prensa independiente que sigue investigando, hasta los fiscales y jueces valientes que se enfrentan al poder, pasando por la ciudadanía movilizada que no deja de denunciar abusos. La lucha no está perdida, pero **requiere memoria, lucidez y una voluntad colectiva de no normalizar lo inaceptable**.

Porque si algo nos ha enseñado la historia reciente del Perú, es que cuando se deja pasar una dictadura sin justicia, cuando se negocia con el autoritarismo por “estabilidad”, **ese pasado siempre vuelve... y cobra con intereses**.